



Carlos Francisco Reyes <cfreyesconsultores@gmail.com>

Fwd: NOTIF. FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLESER S.R.L. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL

1 mensaje

Dr. Enrique Condorelli <enrique@condorelli.com.ar>

9 de octubre de 2023, 9:49

Para: Gustavo Grinberg <gg@grinbergtax.com.ar>, Carlos Francisco Reyes <carlos.reyes@cfconsultores.com>

Dr. Enrique L. CONDORELLI

Abogado (U.N.L.P.)

Magister en Derecho Tributario (U. Austral)

Derecho Tributario - Penal Tributario

Av. 13 nro 847 de la Ciudad de La Plata

Tel 54-221-4826071

Cel. 54-221-5023772

Carlos Pellegrini 781, 1er piso, C.A.B.A.

Tel 54-11-5279-6700

----- Forwarded message -----

De: **Federico Seco** <federico@condorelli.com.ar>

Date: jue, 21 sept 2023 a las 14:57

Subject: NOTIF. FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLESER S.R.L. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL

To: Dr. Enrique Condorelli <enrique@condorelli.com.ar>, Dra. Justina Tomás <justina@condorelli.com.ar>

DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA

Usuario conectado: ENRIQUE LUIS CONDORELLI - 20253123517@notificaciones.scba.gov.ar

Organismo: JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - MORON

Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLESER S.R.L. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL

Número de causa: MO-3669-2021

Tipo de notificación: SENTENCIA

Destinatarios: burzomi@fepba.gov.ar, 20253123517@notificaciones.scba.gov.ar

Fecha Notificación: 22/9/2023

Alta o Disponibilidad: 21/9/2023 12:29:56

Firmado y Notificado por: GRADIN Marcelo Mauro. --- Certificado Correcto. Fecha de Firma: 21/09/2023 12:28:49 **Certificado**

Firmado por: GRADIN Marcelo Mauro. --- Certificado Correcto. **Certificado**

Firma Digital: Verificación de firma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA

Morón, en el día de la firma digital.-

AUTOS Y VISTOS :

Las constancias de la presente causa, " **FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLESER S.R.L. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL**", en trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N1 del Departamento Judicial de Morón.-

RESULTA :

I.- Que con fecha 8/02/2021 se presenta el letrado apoderado del Fisco de la Provincia de Buenos Aires Dr. Burzomi conforme poder general Judicial acompañado en archivo adjunto a la demanda y promueve juicio de apremio contra **BLESER S.R.L., Oscar Alberto Bismarh y Viviana Analía Bismarh** por la suma de pesos **UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 88/100 (\$1.555.932,88)** en concepto de deuda por el impuesto a los Ingresos Brutos, reclamando los periodos: 01 a 12 del año 2014, y sus correspondientes recargos -Régimen Agente de Recaudación / Percepción - por un total de \$1.296.082,10, como también, multas por omisión y por infracción a los deberes formales de, respectivamente, \$195.830, 78 y \$64.020, integrando un total de \$1.555.932,88., conforme surge del título ejecutivo N° 1203866 . Asimismo, solicita como medida cautelar la inhibición general de bienes de los demandados .-

II.- Que con fecha 12/04/2021 se ordenó librar mandamiento de intimación de pago y citación de remate contra el ejecutado, decretándose la inhibición de bienes de los demandados peticionada.-

III.- Que con fecha 2/02/2022 se presenta espontáneamente el Dr. Enrique Luis Condorelli en su carácter de letrado apoderado de los ejecutados, oponiendo excepciones de Prescripción y además respecto de los codemandados **Oscar Alberto Bismarh y Viviana Analía Bismarh** la falta de legitimación pasiva fundada en la inhabilidad de título conforme incs. e) y c) del art. 9 de la Ley 13.406 .

Refiere que la deuda correspondiente a los periodos 1 a 12/2014, que se reclama en el título ejecutivo N° 1.203.866, se encuentra prescripta.-

Asimismo plantea la inconstitucionalidad de los artículos 159 y 161 del Código Fiscal , argumentando y citando jurisprudencia al respecto .-

Concluye ofreciendo prueba y solicitando el rechazo de la demanda con costas a la contraria.-

IV.- Corrido el traslado de rigor, con fecha 28/10/2022 la actora mediante presentación electrónica **CONTESTA EXCEPCION (238001645000818750)** , contesta y se opone al progreso de las defensas sosteniendo que a mérito del accionar en sede administrativa, la prescripción no se encuentra operada en autos, y en consecuencia solicita su rechazo, como así también sostiene la constitucionalidad del Código Fiscal. Acompaña el expediente administrativo N° 2360-0316960/2016 que dio origen al título ejecutivo que sustenta los presentes autos. .-

VI. Con fecha 02/03/2023, la parte actora adjuntó, en formato físico el expediente administrativo N° 2360-0316960/2016; ver fs. 1/567 inclusive.-

Del mismo se corrió el traslado pertinente -ver proveído de fecha 17/03/2023, y contestado que fuera mediante presentación electrónica identificada en el sistema como **CONTESTA TRASLADO (234901645000854045)** - con fecha 06/07/2023 se abrió la presente causa a prueba .-

VII.- Que mediante providencia identificada como **AUTOS PARA SENTENCIA (236001645000890731)** de fecha 7/09/2023 se llamó autos para sentencia encontrándose firme conforme las constancias de notificación del sistema informático , quedando las presentes en estado de resolver y

CONSIDERANDO:

1º) Previo a ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas, es dable efectuar una escueta digresión previa sobre la naturaleza del proceso de apremio.-

En ese sentido debe destacarse que los juicios de apremio son procesos sumarísimos, que presentan un marco aún más constreñido que los típicos juicios ejecutivos, en el cual las defensas permitidas están acotadas, los trámites procesales se simplifican y la sentencia deja abierta la vía para la controversia amplia en el proceso ordinario posterior, para el planteamiento de cuestiones que exceden el angosto diseño de la ejecución a fin de que el Estado perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad general (arg. SCBA Ac. 90.299, del 24/5/06 y sus citas; entre otras).

2º) Sentado lo anterior, cuestiones de orden lógico y metodológico imponen analizar, en primer orden, la excepción de prescripción opuesta por los co- demandados **BLESER S.R.L.** y los Sres. **Oscar Alberto Bismarh** y **Viviana Analía Bismarh** prevista en el inciso "e" del artículo 9º de la ley 13.406.

Cabe señalar que la prescripción liberatoria constituye un modo de extinción de las obligaciones que se produce por la concurrencia del transcurso del tiempo y la inacción o silencio del acreedor y requiere que este último sea titular de un crédito exigible e incorporado a su patrimonio. (JUCA SI Nº 1, Causa nº 10153, 24/08/2008, Causa Nº 12.869, 26/06/2008, entre otras)

La misma posee un fundamento de interés público, que es la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones de derecho sin que sean definidas en un plazo prudencial y respetar las situaciones que deben considerarse consolidadas por el transcurso del tiempo.

En su presentación defensiva, los demandados apuntan, sintéticamente, que: (i) el título ejecutivo que sustenta las actuaciones incluye periodos de ingresos brutos que corren del 1 al 12 del año 2014; (ii) que el art. 157 del C.F. establece el plazo quinquenal de prescripción, como así que el art. 2554 del C.C. y C. prevé que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible; (iii) si bien el período fiscal del impuesto sobre los IIBB es anual (art. 209 del C.F.), los anticipos son exigibles desde la fecha de cada vencimiento mensual, por lo que el art. 159 del C.F. resulta inconstitucional a la luz de lo dispuesto en la normativa de fondo (cfr. art. 75 inc. 12 CN y doct. CSJN in re "Filcrosa", entre otros precedentes de dicho tribunal y de la SCBA); (iv) si bien el art. 2532 del C.C. y C. prevé que las legislaciones locales pueden regular el plazo de prescripción de los tributos, excluye los demás aspectos de la misma, como son las cuestiones vinculadas al cómputo de los plazos, suspensión e interrupción;

La actora por su parte sostiene que la acción no se encuentra prescripta y entiende que resulta aplicable las previsiones del Código Fiscal, concretamente los artículos 157, 159, 160 y 161.

Fundamenta su petición y rebate los argumentos de la excepciónante y en apretada síntesis, sustenta la vigencia del derecho en base a las siguientes consideraciones: (i) El accionar en sede administrativa, para arribar a la determinación del tributo, requisito necesario para su exigencia y (ii) el dictado de la Resolución 218/2020 de suspensión del plazo de prescripción por un año.-

II.- Ahora bien , entiendo que en primer lugar, corresponde distinguir los conceptos reclamados en autos y abordar su tratamiento de manera separada.

Obsérvese que, conforme surge del título ejecutivo Nº 1203866, por un lado, la actora reclama el pago de los períodos 01 a 12 del año 2014 del impuesto sobre los ingresos brutos y por otro, las multas aplicadas por omisión e incumplimiento a los deberes formales, ambas de fecha 19/03/2020.

En el primero de los casos la parte ejecutada sostiene que debe aplicarse lo previsto en los artículos 3956, 3986 y 4027 del derogado Código Civil ello de conformidad con lo previsto en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y jurisprudencia de la CSJN que cita.

Cabe precisar que la reforma al Código Civil establecida por la ley 26.994 con vigencia desde el 1/08/2015 no resulta aplicable al presente caso, pues la litis versa sobre hechos y actos consumados con anterioridad a la fecha indicada, resultando aplicable la ley vigente en ese momento la cual no es otra que la del Código Civil de Velez Sarfield.

Sentado ello, señalo que el artículo 3.956 dispone que *"La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación."*

Por su parte el artículo 3.986 establece que *"La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción."*

Finalmente, el artículo 4027 regula que "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 1º De pensiones alimenticias; 2º Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana; 3º De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.

El artículo 157 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concordantes anteriores), en su primer párrafo, establece que: *"Prescriben por el transcurso de cinco (5) años las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas"*.

Por su parte, el artículo 159 dispone *"Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. El término de prescripción de la acción para aplicar y hacer efectivas las sanciones legisladas en este Código comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales. (.)"*

A su turno, el artículo 160 del cuerpo legal referido, dispone que *"La prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá: .3) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación debidamente notificada, o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado."*

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) establece que: *"Se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación en los supuestos que siguen: a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado (.)"*

En el caso en estudio, el plazo de prescripción es el de cinco años.-

De acuerdo a lo expuesto, entonces, la cuestión a resolver en autos gira en torno a establecer cuando es el momento en que comienza a computarse el inicio del plazo de prescripción -dies a quo-, cuestión que surge regulada de diferente manera en la normativa señalada, ello a fin establecer si las obligaciones fiscales que surgen del título ejecutivo Nº 1224867, para poder determinar si ha transcurrido el plazo de cinco años y a partir de allí, si encuentran prescriptas -o no-.

III.- En este andar observo que la cuestión ha sido zanjada por la SCBA en la Causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007 y en la causa A. 71.388, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos", sent. de 16-V-2018, cuestión que torna aplicable la doctrina legal que emana de sus fallos.

En este sentido se ha sostenido que "La doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que emerge de los fallos de la Suprema Corte, establecida sobre la misma o análoga situación jurídica. (SCBA LP C 118313 S 13/09/2017).

Retomando lo sostenido por la SCBA en aquel precedente debo señalar que el Máximo Tribunal Provincial entendió que el comienzo del plazo prescriptivo de la acción del Fisco Provincial para perseguir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos no puede alongarse en contraposición a lo dispuesto en el artículo 3956 del CC más allá de la fecha del título de la obligación y por ello los agravios relacionados con la aplicación del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004, actual art. 159 t.o. 2011), resultaban procedentes por cuanto la norma local regula el inicio del cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales en forma distinta a los arts. 3.956 y 3.986 segundo párrafo del Código Civil, vigente durante la época de los hechos debatidos (conf. arts. 7 y 2.537, Cód. Civ. y Com.). (Conf. SCBA LP A 72389 RS-33-2022 S 17/05/2022).

En este punto debo recordar, que nuestro Tribunal de Alzada se ha referido a la constitucionalidad de las normas atinentes a la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Fiscal , inclinándose por la validez de las normas locales en numerosos fallos - ver causas Nº 2.895, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Palmieri, Jorge Francisco y otros s/ apremio provincial", sent. del 23 de febrero de 2.012; n° 4.715, "Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Domato, Laureano Carlos s/ apremio provincial", sent. del 25 de agosto de 2.015; y n° 5.201, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Mazzuz, Patricia María s/ apremio provincial", sent. del 23 de junio de 2.016, entre muchas otras), criterio que comparto, pero en virtud de lo resuelto por la SCBA en el marco de la causa supra mencionada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos S.R.L. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", 16/5/2.018 , que el aludido artículo 133, primer párrafo, segunda parte del Código Fiscal (t.o. 2.004, actual art. 159 -t.o. 2.011-),

Con respecto específicamente, del *"dies a quo"* para el cómputo de la prescripción, manifiesta una opinión contraria al Címero Tribunal Provincial, a la cual en términos personales, adhiero, pero para ambos Órganos Jurisdiccionales, es decir tanto este Juzgado de Primera Instancia como la Cámara, lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, constituye doctrina legal y por lo tanto de aplicación obligatoria para todos los órganos judiciales inferiores de la Provincia.

De lo expuesto se deriva que en materia de prescripción resultan aplicables las disposiciones del Código Civil. -

IV.- En consecuencia , conforme la doctrina legal de la Suprema Corte Bonaerense vigente en la materia, aplicando al caso las disposiciones del artículo 3956 del Código Civil.

Así, tenemos que el plazo de prescripción de todos los períodos reclamados, a la sazón 01 a 12 del año 2014 comenzaron a computarse desde la fecha del título de la obligación, que conforme surge del propio título ejecutivo, siendo el último de ellos en enero de 2015; por lo que a tenor de la línea de razonamiento que propongo en el presente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 157 del Código Fiscal y 4027 del Código civil, el plazos de prescripción comenzó a correr desde el 12 de enero del año 2015.-

Así las cosas, aplicando el plazo quinquenal bajo el prima legal determinado precedentemente establecido cabe señalar que al momento de iniciar las presentes actuaciones el plazo de prescripción para iniciar la acción respecto de cada uno de los períodos reclamados 01 al 12 del año 2014 ya había operado.

No enerva lo expuesto el hecho que la parte actora alegue la existencia de actos suspensivos e interruptivos del cómputo del plazo de prescripción, surgidos del expediente administrativo, toda vez que ninguno de ellos, tuvo la entidad suspensoria suficiente.

Renglón puntual merece el tratamiento el dictado, en fecha 10/01/2020, de la Disposición Delegada SEATYS Nº218/2020, notificada al accionado con fecha 28/01/2020 (ver paginas 500/511 del Expediente Administrativo Nº 2360-0316960 16; que suspende por un año el cobro de prescripción. Al respecto hay que destacar que al momento en que ello ocurre la acción ya se encontraba prescripta. Ello así, toda vez que más allá de la validez del acto administrativo, el mismo cobró eficacia, recién con fecha 28 de enero de 2020; y para ese entonces ya había superado la fecha límite del 12 de enero de 2020.-

En conclusión, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción del período menos antiguo, este es el 12/2014 comenzó a computarse el día 12/01/2015 , aplicando el plazo de prescripción de 5 años -art. 4027 del CC y 157 del CF- cabe concluir que la misma operó el día 12/01/2020.-

La propia parte actora toma como inicio del plazo para el computo de los intereses que el ejecutado adeuda la fecha señalada del 12 de enero de 2015 -ver título ejecutivo Nº 1203866-.

En estas condiciones y habiendo acaecido la prescripción de los períodos controvertidos respecto del contribuyente "Bleser SRL" y de los declarados responsables solidarios Oscar Alberto Bismarh y la Sra Viviana Analía Bismarh, estimo que corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción deducida en el caso por la parte demandada.-

V.- En cuanto al plazo de prescripción de la facultad que la actora posee para establecer las sanciones por el incumplimiento tanto de obligaciones formales como material que reclama en autos -las multas aplicadas por omisión e incumplimiento a los deberes formales, ambas de fecha 19/03/2020-, entiendo que las mismas se tratan de obligaciones accesorias a la principal que es el pago del impuesto sobre los ingresos brutos (art. 523 del Código Civil).

En consecuencia, siendo que extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesorio -conf. art. 525 del Código Civil-, la facultad de la actora para sancionar a la ejecutada también se encuentra prescripta.

VI. En virtud del modo en que se resuelve la prescripción invocada, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes planteos efectuados por los demandados.

VII.- En atención al resultado del litigio, se imponen las costas a la parte actora en su calidad de vencida (art 68 del CPCC por remisión del Art 25 de la ley 13.406).

A tenor de los argumentos vertidos precedentemente, normativa y jurisprudencia citada,

FALLO:

1) En razón de todo lo expuesto, y conforme la doctrina legal de la Suprema Corte Bonaerense vigente en la materia corresponde admitir la excepción de prescripción opuesta por Bleser SRL y los responsables solidarios Oscar Alberto Bismarh y la Sra Viviana Analía Bismarh y rechazar la presente ejecución (art. 9 inc. e) de la ley 13.406).

2) Imponer las costas del juicio a la parte actora, atento su carácter de vencida (arts. 68, 556 y cc. del C.P.C.C; 25 de la Ley 13406).

3) En atención a lo resuelto, levántese la medida cautelar ordenada en fecha **12/4/2021** y trabada según lo que surge de las presentaciones electrónicas de fecha **06/05/2021**. Librense los oficios por Secretaría. NOTIFÍQUESE una vez acreditado el mismo (arts. 135 inc. 5º del C.P.C.C. y 25 de la Ley 13406).

Previo al libramiento del oficio, deberá darse estricto cumplimiento con el art. 21 de la Ley 6716.

4) Atento el estado de autos y a fin de dar cumplimiento con el artículo 21 de la ley 6716, tomando como base regulatoria el monto del título ejecutivo (**\$ 1.555.932,88**), siendo que todo el proceso tramitó bajo el imperio de la Ley 14.967 regúlense los honorarios profesionales del letrado interviniente por la parte demandada, **Dr. Enrique Luis Condorelli (Tº XLIX Fº 214 del C.A.LP.)**, a mérito de la presentaciones realizadas en fecha 2/2/2022 11:49:48 a.m., (Opone Excepción) y el 1/02/23 10.07.09 am (Contesta vista) , la cantidad de **18 JUS**, con más los aportes de ley (arts. 1, 15, 54 de la ley 14.967, 22 de la Ley 13406 y 12 de la Ley 6716). Hágese saber que, en el caso de corresponder, el impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios regulados. A tal fin, el profesional beneficiario deberá acreditar su situación actual frente a dicho tributo.

En cuanto al letrado apoderado del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, **Dr. Alejandro Martin Burzomi (Tº X Fº453 CAM)**, no corresponde la regulación de honorarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-Ley 7543/1969. **REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE** a las partes por sistema .-